

## ¿Qué cabría esperar en materia económica y social, si un gobierno “progresista” accediera al poder en el 94?

Hace algún tiempo definimos el período del gobierno de Cristiani como un período de re-acumulación primaria de capital, con miras o con el fin de sentar las bases para un nuevo modelo económico. Pensamos que si bien ambos procesos son diferenciables teóricamente, no es posible empíricamente decir aquí concluyó uno y aquí comienza el otro, porque lo uno se convierte en lo otro. En este sentido, sólo podemos decir que si bien el nuevo modelo aún no está funcionando a cabalidad, tampoco la re-acumulación primaria ha concluido, pero marchamos hacia el nuevo modelo.

Y esto es así porque los sujetos de ese modelo poseen tal capacidad de implementación y de poder real, esto es, de poder económico, que hasta los mismos políticos de izquierda aceptan el hecho de que nuestra economía seguirá dentro de los marcos del sistema capitalista e, incluso, dentro del mismo modelo. En este último aspecto no existe consenso, ya que algunos hablan de un nuevo modelo o de un modelo alternativo; sin embargo, está todavía por verse si existe capacidad teórica para formularlo y capacidad política para implementarlo. Ya que si entendemos lo que es el sistema capitalista y conocemos *su racionalidad, sus tendencias y sus consecuencias*, a quienes propugnan por un modelo alternativo dentro del capitalismo, cabría preguntarles si se les puede pedir a los capitalistas que no actúen conforme a la lógica del capital, que renuncien a

su búsqueda insaciable de ganancias. Quizás se podría aspirar a que moderasen su apetito. Si esto fuese posible, es obvio que no basta para crear un modelo alternativo que responda a los intereses de las mayorías populares.

El mérito de un buen político es el realismo, que no puede, ni debe de ser confundido con el oportunismo ni con el falso realismo pragmático que por naturaleza es conformista y defensor del *status quo* y, en consecuencia, conservador. Políticamente hablando, el falso realismo pragmático se encuentra entre los sectores de derecha que viven tan a gusto con el sistema que hablar de su transformación es sencillamente un absurdo, cosa de locos o desfasados históricos, ya que después del derrumbe del socialismo histórico, parecen tener razón en que no existe alternativa y que la humanidad debe de resignarse a vivir para siempre dentro de los marcos del capitalismo.

Para algunas personas lo anterior es real, ya que disfrutan de las ventajas del sistema; para otros, es tan solo una ilusión o una esperanza y, al no conocer la realidad esencial del mundo en que viven, optan porque es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Pero existe un sector muy grande de la población que no sólo no disfruta de las supuestas bondades del sistema, sino que sufre sus consecuencias y no tiene ni siquiera la más remota esperanza de que su situación pueda

cambiar. Existen otros que por solidaridad o conciencia de clase —palabras actualmente descalificadas, pero no por ello carentes de un contenido real— incluso no viviendo en la miseria, ni al margen de la sociedad, propugnamos por su transformación.

Un buen gobierno o un partido por el cual votaríamos para que articulara un buen gobierno, sería aquel que siendo realista en materia política no hubiera perdido la utopía, porque solamente la tensión entre realidad y utopía hace posible avanzar en el camino del desarrollo socio-histórico de la humanidad. En nuestro caso particular, avanzar en el proceso de democratización económica, social, política y cultural. Y aunque ya se haya dicho infinidad de veces, es preciso seguir insistiendo en que no basta con que haya elecciones libres, puras y transparentes, etc., es decir, que la democracia política puede convertirse en mera ilusión si no existe democracia en los otros ámbitos de la actividad humana. En consecuencia, si bien aceptamos la visión política realista de que en el corto y mediano plazo no es posible cambiar el sistema, no podemos aceptar que éste sea el fin de la historia y el fin de las utopías.

Para cualquier aspirante a gobernar este país —aunque sea de pocas luces o venga de residir muchos años en el exterior o haya demostrado su incompetencia en el poder, o se haya retirado del mismo a última hora, o su conocimiento del poder sea más militar que político—, debería de estar claro que los problemas mayores de nuestra población son la pobreza y la marginación social. Esto es un hecho primario y fundamental que no admite discusión y si la economía debe de estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía, cualquier estrategia económica y social debe de tener por finalidad buscarle solución a tales problemas. Hasta aquí podría haber unanimidad entre los heterogéneos candidatos. Las diferencias surgen cuando se piensa en el *cómo*, o más precisamente, cuando se formulan articuladamente soluciones. E, incluso, habiendo dado por aceptado que en ningún momento se buscará alterar el sistema, podría también ser aceptado por los diferentes partidos que la solución está en *generar más empleo*, aunque las diferencias podrían comenzar al agregar y *eleva los ingresos actuales* de los que

tienen empleo.

Aquí la cosa comienza a complicarse, porque cuando se plantea el incremento de los ingresos de los trabajadores aparece el gran argumento de que ello es generante de inflación, ya sea porque se incrementan los costos de producción o porque se incrementará el déficit fiscal, según se trate del sector privado capitalista o del sector público. Aquí, aunque se trate de palabras proscritas en el léxico cotidiano, aparece la lucha de clases, la cual nos habla de los intereses opuestos entre trabajadores y empleadores. Y ello es tan real que quienes tan sólo habían oído hablar de este fenómeno, seguramente luego de la experiencia vivida en el foro de concertación económica y social, ya no les queda la menor duda de que ello es así, que los empresarios están dispuestos a aceptar cualquier cosa menos que les toquen sus intereses económicos. De allí que sin descalificar a la concertación como un mecanismo de convivencia social es preciso reconocer sus límites y sus posibilidades. Si accediera un gobierno progresista al poder, debería de concertar con todos los sectores nacionales su programa de gobierno, de manera tal que se definan con claridad y precisión las reglas del juego y no se venga después con acciones desestabilizadoras.

Ahora bien, el argumento de que el incremento en los salarios genera inflación, por más de que sea un hecho empírico, es una falacia, ya que no ocurriría si a los empresarios capitalistas les bastara explotar a los trabajadores y aceptaran disminuir sus márgenes de ganancia, pero acostumbrados como están a las ganancias extraordinarias, fruto de la sobreexplotación, prefieren cargar con los costos que les implica la inflación a remunerar la fuerza de trabajo por su valor, esto es, a pagar salarios que sean suficientes para satisfacer las necesidades materiales y espirituales del trabajador y de su familia.

Sin embargo, un gobierno progresista podría sentarse con los empresarios y “hacer números”. Bastaría con tener acceso a las declaraciones de ingresos *declarados*, para demostrarles que mientras las ganancias en términos reales presentan una tendencia creciente, los salarios en términos reales presentan una tendencia decreciente y que sólo tienen dos alternativas o pagan mayores salarios o pagan más impuestos, ya que esta sociedad no



puede seguir así. Para evitar los conflictos sociales es preciso mejorar la distribución del ingreso nacional y, o lo hacen los empresarios o lo hace el Estado. Bajo las reglas del capitalismo todo tiene un costo o si se prefiere un precio y si se quiere vivir en paz y tranquilidad en este maravilloso país de clima tropical, pues, no hay de otra que pagar su precio.

Tampoco tiene fuerza teórica el argumento de que el incremento de salarios en el sector público genera déficit y, consecuentemente, inflación, ya que si el gobierno recauda más impuestos —vía eficiencia en la recaudación—, reduce su personal y hace un uso racional del presupuesto no tiene por qué generar déficit y consiguientemente inflación. Al contrario, lo que estaría logrando es un aparato público eficaz y eficiente para cumplir sus objetivos de servir a la población. Claro que ello pasa por eliminar al personal corrupto, al que llegó al gobierno por puras influencias políticas mas no por capacidad, y al que es innecesario. Pero como no

se trata de echar a la calle a las personas así no más, ya que, al fin y al cabo, son seres humanos con necesidades como todos, se podría seguir el proceso de privatización, pero poniéndolo al servicio de los ex empleados públicos, promoviendo, además, la creación de sociedades anónimas laborales, cooperativas, etc.

Esto último nos introduce al problema de cómo enfrentar el desempleo y el subempleo. Para algunos, esto será la resultante del crecimiento económico del sector capitalista de la economía. Pero habría que esperar quizás, no al año 2000, sino al 2500, cuando la mayoría de los salvadoreños nos hubiésemos muerto de hambre. Porque ocurre que el capitalismo lleva en sí mismo la necesidad de mantener un ejército de reserva, esto es, grandes contingentes de mano de obra desempleada o subempleada. Sólo para dar un ejemplo, encontramos que las cifras absolutas del desempleo abierto en Estados Unidos superan a la población total de Centroamérica. ¿Maravilloso sistema en el que vivimos, no? Pero bien, como hemos aceptado, por impotencia, no cambiarlo, cabría esperar que el capital o los empresarios capitalistas grandes, medianos y pequeños aceleraran sus ritmos de acumulación, esto es, que aceleraran sus procesos de inversión, y al hacerlo, generen mayores puestos de trabajo. Pero, ¿por qué habrían de hacerlo? Porque cuentan con la garantía de que el nuevo gobierno no viene con políticas de nacionalización de empresas, ni de expropiación de tierras y que en cuanto a la política macroeconómica no habrá ningún cambio sustancial, ya que buscará mantener controlados la inflación y el tipo de cambio y la brecha comercial se reducirá a un mínimo manejable, mediante el incremento de las exportaciones no tradicionales y, al menos a partir del segundo año de gobierno, no debería existir déficit fiscal.

En otras palabras, el nuevo gobierno "progresista" reconoce y acepta las sobredeterminaciones del capital y de los organismos financieros, así como de las agencias de ayuda internacional. Pero, claro, buscando siempre lo que sea mejor para los intereses de la nación como un todo. Al fin y al cabo, la política económica no se puede manejar como si se tratase de recetas de cocina, por más que éstas vengan de los *grandes chef* del FMI, BM

o del BID. Y aunque se reconoce la sobredeterminación externa, es indiscutible que existen márgenes de maniobra; si éstos no siempre se aprovechan es más por incapacidad técnica que por imposibilidad real. La heterogeneidad de la realidad exige adaptar los planteamientos generales. Esto es de una obviedad tal que sólo las mentes dogmáticas o perezosas no entienden.

Si se mantendrá sustancialmente la misma política macroeconómica, cabría preguntarse, ¿será correcto seguir manteniendo sobrevalorado el tipo de cambio, como se le ha criticado al actual gobierno, sobre todo cuando se busca incrementar las exportaciones y reducir las importaciones? Mientras se tengan suficientes divisas es preciso aprovecharlas para desarrollar la producción agropecuaria, agroindustrial e industrial. Es posible hacerlo, si no encarecemos nuestras importaciones de bienes de capital. Lo importante en este punto es buscar la forma para que esas divisas no se destinen significativamente a la importación de bienes de consumo, sobre todo de consumo superfluo, lo cual exigirá algunas medidas orientadas a tal fin.

Por otra parte, los dólares seguirán llegando, ya sea vía remesas o donaciones, aunque no de manera indefinida. De allí que sea de suma importancia hacer el mejor uso de ellos, en el menor corto tiempo posible. Este es un hecho que marca diferencias fundamentales con otras realidades que es preciso saber aprovechar. Adicionalmente, es un hecho incuestionable que la devaluación genera inflación y no queremos inflación porque los más afectados son los sectores populares, aunque no sean los únicos, ya que las variaciones en los precios ocurren de manera desigual. Esto lleva a que algunas empresas o sectores se vuelvan receptores de excedentes y otros transmisores.

Ahora bien, el incremento en las exportaciones exige de un incremento en la productividad del trabajo para lograr una competitividad externa real y no artificial o aparente como la que se fundamenta en la devaluación de la moneda, que a lo único que lleva es a abaratar artificialmente las exportaciones, para ello se tienen que pagar salarios de hambre. En consecuencia, lo que procede es modernizar el aparato productivo nacional importando bienes de capital, así como invirtiendo en la ca-

pacitación acelerada de la fuerza de trabajo. Adicionalmente, cabría señalar que una estrategia de exportaciones exige un cambio institucional en el cuerpo diplomático y consular, eliminando la práctica absurda de los agregados militares, quienes deben ser sustituidos por verdaderos agentes de comercio que sondeen los mercados del exterior e informen periódicamente sobre los espacios de mercado existentes y, de ser posible, que establezcan contactos con importadores a fin de penetrar esos mercados. Toda esa información procesada debería ponerse a disposición de las empresas capitalistas así como de los sectores no capitalistas de la economía. Además, habría que ampliar nuestras relaciones comerciales con todos los países del mundo y en esto es válido el aforismo gringo *business are business*.

Dentro del gran objetivo de la generación de empleo cabría establecer una política regional unificada de atracción a la inversión extranjera, de tal modo que el capital transnacional no obtenga más beneficios de los que normalmente se le confieren en cualquier país moderno. Asimismo, habría que consolidar el proceso de integración regional para aprovechar las economías de escala y, adicionalmente, lograr una mayor presencia a nivel internacional como bloque. Esto es tan necesario y obvio que no requiere de argumentos a su favor.

Es claro que aunque el sector capitalista de la economía funcionase a todo vapor —ahora habría que decir a toda electricidad— no es posible disminuir significativamente el desempleo y el subempleo y, consecuentemente, los elevados niveles de pobreza absoluta y relativa. De allí que sea necesario *potenciar, consolidar y desarrollar* los gérmenes de la nueva economía popular, fundamentados en el propio esfuerzo organizativo y productivo de los sectores populares. Nos estamos refiriendo al sector cooperativo, tanto rural como urbano, a las comunidades de repobladores y repatriados y a otras experiencias comunitarias auspiciadas por diferentes instituciones y organizaciones no gubernamentales. El gobierno de cara a este sector, nos parece que debería de propiciar, al menos, la creación de un sistema financiero popular y un centro de capacitación tecno-empresarial, pero léase bien *propiciar* y no que el Estado asu-

ma tales funciones que parecen no sentarle bien<sup>1</sup>.

Asimismo, debe auspiciarse la organización del sector informal urbano a través de la creación de sociedades anónimas laborales, lo cual exige de una legislación particular, ya que en el país no existe esta figura jurídica. Las cooperativas o cualquier otra forma asociativa también deben ser promovidas para enfrentar de manera colectiva sus diferentes problemas. Los problemas del sector informal urbano pueden resumirse en cuatro grandes áreas: financiamiento, aprovisionamiento de medios de producción, capacitación tecno-empresarial y comercialización. Si esta problemática fuese superada y se "impregnara" de los valores de racionalidad e identidad de la nueva economía popular, el sector informal urbano podría avanzar hacia su conversión en una nueva realidad, en una auténtica estrategia alternativa de desarrollo. Entonces sí se podría hablar de un sector popular de la economía, fuerte y autosuficiente, y con gran capacidad para generar nuevos puestos de trabajo y mejorar su nivel de ingresos.

Se podrían generar nuevos puestos de trabajo porque es propio de la identidad de la nueva economía popular la no concentración de los ingresos y, en consecuencia, no hay posibilidad de derroche, pero sí de reproducción en escala ampliada. Los excedentes en la nueva economía popular tienen por destino primario la reinversión, porque uno de sus valores es la solidaridad y, en consecuencia, se busca favorecer a quienes aún no logran encontrar una ocupación que les permita tener un ingreso para vivir. Pero bien, esta es una tarea propia de los sectores populares y, en consecuencia, no tiene que ver con la actividad propia del Estado.

Lo que sí debería ser una actividad prioritaria del gobierno es supervisar que las donaciones que reciben las diferentes organizaciones no gubernamentales, se destinen a beneficiar a los sectores pobres y marginados de la sociedad. De modo que esos canales de ayuda internacional se mantengan de manera permanente, porque la actividad de las organizaciones no gubernamentales está efectiva-

mente al servicio de las mayorías populares y no de sus directores. La importancia que han cobrado las organizaciones no gubernamentales en la actualidad es de tal envergadura que es preciso establecer mecanismos de supervisión para lograr una mayor eficiencia y racionalidad en el manejo de sus recursos, lo cual pasa, obviamente, por establecer la legislación necesaria.

La política social del gobierno debe de centrarse en las siguientes áreas: salud y salubridad, educación formal y técnica, y esparcimiento. No debe confundirse la política social con la política económica sectorial. Los sectores pobres y marginados requieren ciertamente de política social en las áreas antes señaladas, pero en la medida que por su propio esfuerzo organizativo y productivo buscan resolver sus problemas de pobreza y marginación social, exigen una política económica sectorial especial, como por ejemplo, una política de electrificación rural o la suspendida carretera longitudinal del norte o más precisamente, una política crediticia por medio del sistema financiero popular o una política fiscal preferencial, pues hasta hace algunos meses las cooperativas estaban exentas del pago de timbres y papel sellado.

En materia social existe una fuerte deuda con los sectores populares y no es posible seguir postergando más el momento de su cancelación. El analfabetismo podría ser erradicado mediante una campaña masiva de educación popular; existe la experiencia y la capacidad para hacerlo, lo que se requiere son recursos. Este problema de los recursos será una constante que se presentará en todas las políticas sociales, porque los servicios sociales deben prestarse de manera gratuita a los sectores populares. Por lo tanto, es preciso entrarle de una vez al problema.

El nuevo gobierno contará aún con muchas donaciones orientadas al plan de reconstrucción nacional con las cuales se podría realizar mucha obra física, pero también se podría y se debería reorientar el gasto público. En tiempos de paz interna, desaparecido el fantasma del comunismo y habiéndose eliminado las diferencias en la región, no tie-

1. Para un mayor desarrollo de esta temática, ver mi trabajo, *La nueva economía popular. Una utopía en marcha*. UCA Editores, 1993.

ne ningún sentido seguir manteniendo un ejército con las dimensiones del actual. En vez de gastar cuantiosos recursos en preparar y luego mantener a una cantidad enorme de parásitos sociales, con todo lo que implica sus gastos de funcionamiento: armas, municiones, combustible, transporte, instalaciones, agua, energía eléctrica, etc., toda esa cantidad increíble de recursos debe dedicarse a la satisfacción de las necesidades sociales. Esto no sólo es bueno para la población necesitada, sino también para el sector capitalista de la economía, pues ello le permitiría contar con una fuerza de trabajo sana, inteligente y capacitada.

No se pretende negar a los militares, en tanto que seres humanos, un lugar en la sociedad; pero para ello, deben reconvertirse en fuerza de trabajo productiva. Por eso, todos los que no superen los cuarenta años deberían capacitarse, porque como militares nadie los necesita. Esta es una realidad que más tarde o más temprano deberán afrontar los militares. Por lo tanto, más les vale irse preparando desde ya... Quizás no lo pueda hacer el futuro gobierno, pero se tendrá que hacer en un mañana no lejano.

Uno de los problemas mayores que enfrenta nuestra población es la carencia de lugares de esparcimiento gratuito. Una forma práctica para matar dos pájaros de un tiro, sería la creación masiva

de parques nacionales a lo largo y ancho del territorio nacional con sus respectivas canchas de fútbol, por ejemplo, dado que este es el deporte de las mayorías. Con ello no sólo se habilitarían lugares de sano esparcimiento, sino que a su vez se preservaría el medio ambiente. Y volviendo al ejército, ¿cómo es posible que éste siga en posesión de uno de los pocos parques nacionales existentes en el país, como es el de La Palma? ¿O que se haya apoderado de una cantidad increíble de manzanas en El Espino para su escuela de inútiles? Realmente, sólo con las instalaciones que posee el ejército se podrían habilitar institutos tecnológicos, escuelas, hospitales, centros vocacionales, asilos de ancianos y discapacitados, etc., y aún sobraría para albergar algunos ministerios que pagan onerosos alquileres en la actualidad. Ciertamente, la causa del déficit fiscal y social en nuestro país son los militares. Y mientras exista el ejército, no existirá la república, sino existirá una república con déficit.

Como nuestra pretensión no ha sido crear un programa económico y social a nuestro deseado gobierno progresista, sino tan sólo expresar algunas ideas acerca de lo que cabría esperar de él, con lo dicho basta y sobra para que los técnicos lo retomen y formulen.

A. M.